

#10,00

ICONOS|11

Revista de FLACSO-Ecuador
No 11. Julio, 2001
ISSN 13901249

Los artículos que se publican
en la revista son de exclusiva
responsabilidad de sus autores,
no reflejan necesariamente el
pensamiento de **ICONOS**

Director de Flacso-Ecuador
Fernando Carrión

Consejo editorial
Felipe Burbano de Lara (Editor)
Edison Hurtado (Co-editor)
Franklin Ramírez
Alicia Torres
Mauro Cerbino
Eduardo Kingman

Producción:
FLACSO-Ecuador

Diseño e ilustraciones:
Antonio Mena

Impresión:
Edimpres S.A.

FLACSO-Ecuador
Ulpiano Páez N 19-26 y Av. Patria
Teléfonos: 232-029/ 030 /031
Fax: 566-139

E-mail: fburbano@flacso.org.ec
ehurtado@flacso.org.ec

ICONOS agradece el auspicio del
Instituto Latinoamericano
de Ciencias Sociales (ILDIS)

FLACSO . Biblioteca

Índice

Coyuntura

6

**Diálogo y poder:
los simulacros de la democracia**

Pablo Dávalos

17

Colombia, Estados Unidos y la seguridad nacional en los países andinos

Adrián Bonilla

Dossier

30

**El saldo social de la década de 1990:
aumento de la pobreza y concentración del ingreso**

SIISE

42

**“Recetas” para todo, trabajo para pocos.
La transformación del trabajo y de la política social en América Latina**

Laura Pautassi

60

**Fenómenos ligados al cambio de las políticas públicas:
el caso del INNFA**

Nathalia Novillo

68

**Diagnóstico sobre seguridad ciudadana en Ecuador:
un paso hacia la definición de políticas públicas**

Equipo Políticas Públicas, FLACSO

80

**El género en el Estado:
entre el discurso civilizatorio y la ciudadanía**

Gioconda Herrera

89

Sugerencias bibliográficas sobre política social y política pública

Debate

94

La frontera étnica en el espacio de la crítica

Andrés Guerrero

Temas

100

**Los personajes masculinos de Pablo Palacio:
orden y desorden del buen caballero quiteño**

Pierre Lopez



Frontera

126

El zapatismo y la nueva ley indígena en México

Jorge Alonso

110

**¡Chiapas es México! Autonomías indígenas:
luchas políticas con una gramática moral**

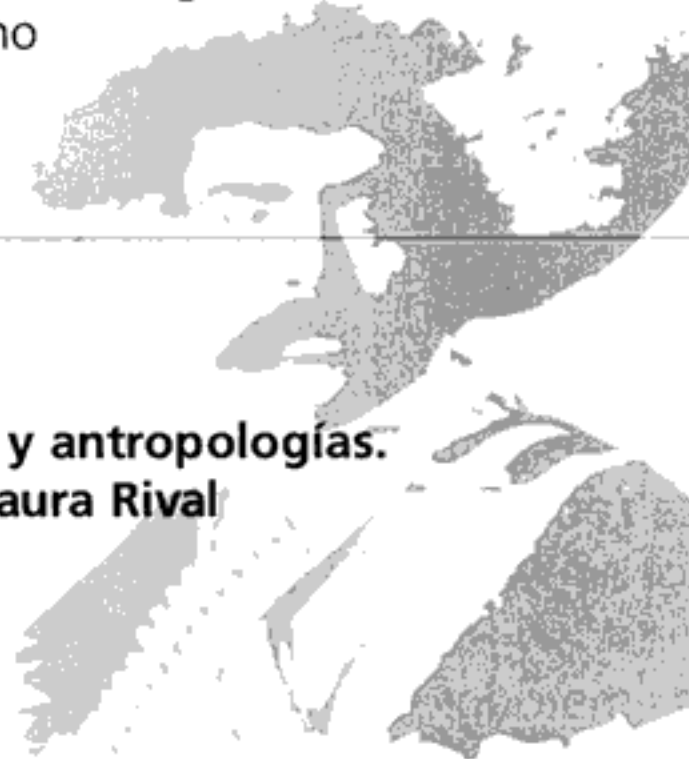
Xochitl Leyva Solano

Diálogo

140

**De antropólogas y antropologías.
un diálogo con Laura Rival**

Alicia Torres



152

Reseñas

164

Sugerencias bibliográficas

168

Contenidos ICONOS 10

Colombia, Estados Unidos y seguridad nacional en los países andinos

Adrián Bonilla*

Introducción

El propósito de este trabajo es sistematizar algunos hechos que permitan comprender la diferencia de las agendas de seguridad nacional de los países andinos respecto de aquellas de Bogotá y Washington, a partir la ejecución del Plan Colombia.

En primer lugar, se examina la política exterior de los Estados Unidos hacia la región andina alrededor, básicamente, del tema del narcotráfico. Se encuentra que ella, a pesar de la retórica multilateral, solo puede ejecutarse a través de dispositivos bilaterales. La *seguritización* del combate al tráfico de drogas ha fracasado como estrategia, pero además, esa política ha sido una amenaza a la estabilidad de la región y a la seguridad de los países andinos.

Luego, se analiza el conflicto colombiano y su impacto en la seguridad de los países vecinos, que discriminan entre el tópico del narcotráfico y el reto que implica la masiva ayuda militar de Washington, así como la estrategia estadounidense, compartida con el gobierno de Bogotá, de regionalizar el problema. El trabajo identifica las potenciales amenazas a la seguridad de los estados nacionales andinos.

Finalmente, se reflexiona sobre las posibilidades de una solución militar al conflicto colombiano, para concluir que ello es improbable, pero que una estrategia en esa dirección, no sólo que podría agudizar el conflicto interno, sino que construiría las bases de su potencial expansión a otros países.

Política exterior estadounidense, narcotráfico y región andina

La política exterior de los países andinos procesa los temas que aluden a los Estados Unidos en un contexto que se caracteriza por la globalización como dinámica, la asimetría en términos de la influencia económica y política, procesos de integración regional inconclusos y un nuevo escenario internacional producto del fin de la Guerra Fría.

El sistema interamericano se rearticula a lo largo de la década de los noventa. Los intereses de seguridad nacional estadounidenses para prevenir la presencia soviética en el hemisferio -que condicionaban el conjunto de la agenda- dejan el paso a temas más allegados a los valores y a la sociedad civil, y a agendas de naturaleza económica¹. El sistema de defensa interamericano entra en receso y se impone una visión que tiende a la disminución de la importancia de los temas de tradicionales (territoriales y de soberanía), que descubre nuevos roles para las fuerzas armadas en todo el continente -empujándolas hacia la seguridad pública-, y que se caracteriza por la presión hacia la disminución de presupuestos y la neutralización del protagonismo en la gestión política doméstica².

Para la mayoría de estados latinoamericanos el procesamiento de la política exterior estadouni-

1 América Latina se ha diferenciado regionalmente, el grado de influencia de los Estados Unidos ha variado y los roles de las instituciones transgubernamentales y estatales también han cambiado. Ver Joseph Tulchin y Ralph Espach, 2001, "A Call for Strategic Thinking", en Tulchin y Espach eds. *Latin America in the New International System*, Lynne Rienne Publishers: Boulder.

2 Ver Margaret D. Hayes, 2000, "La política de defensa en los Estados democráticos", Ponencia al seminario regional CHDS, Guatemala, marzo 2000.

* Profesor-Investigador de FLACSO-Ecuador.

dense es reactivo, o sea que la agenda se construye alrededor de las iniciativas estadounidenses, y éste ha sido el caso de los países andinos. Es decir, la política exterior normalmente se ha levantado alrededor de los intereses e iniciativas de la parte más fuerte de la relación, quedando como estrategias locales, la posibilidad de vincular temas que puedan interpelar intereses estadounidenses y eventualmente permitan ganar espacios en ámbitos distintos de interés latinoamericano.

Como resultado de un proceso político internacional, fuera del control de los estados de la región y de la crisis política y económica de los últimos años, aparecen dos consecuencias centrales del entorno de inestabilidad que identifican el escenario en donde operan las políticas exteriores andinas: vulnerabilidad y debilidad.

Muy esquemáticamente, la agenda estadounidense para América Latina puede resumirse alrededor de los siguientes ejes³:

Democracia, que supone básicamente la elección de gobiernos civiles en condiciones de competencia y la vigencia de un núcleo mínimo de derechos humanos relativos a los derechos y garantías de las personas, aquellos llamados “de primera generación”. Democracia supondría también combate a la corrupción, al narcotráfico y a la delincuencia internacional.

Liberalización, que implica la construcción de un espacio de flujo de bienes y servicios, con excepción de la fuerza de trabajo, y la adecuación de las legislaciones con el propósito de crear economías desprotegidas.

Libre Comercio y Desarrollo. Los Estados Unidos proponen la creación de una zona de libre comercio desde Alaska a Tierra del Fuego. En Miami 1994 se definió el 2005 como la fecha de iniciación de ese sistema que es concebido a imagen y semejanza de NAFTA⁴.

Una de las características de la agenda estadounidense es que su procesamiento político es vinculante. Es decir, que los temas de comercio, por ejemplo, están ligados a los temas políticos⁵. Así, no es posible imaginarse el sistema de preferencias arancelarias andinas sin pensar que el cimiento de esa política comercial es la preocupación estadounidense por el narcotráfico.

Todos estos temas de los Estados Unidos se presentan también para la región andina, pero aquí aparecen con especial énfasis aquellos que se vinculan a la seguridad: los Estados Unidos priorizan narcotráfico y democracia.

Narcotráfico, en los mandatos de las cumbres presidenciales, es un tópico cobijado bajo el término democracia. El objetivo estratégico nacional estadounidense frente al narcotráfico es reducir la oferta de narcóticos proveniente de las sociedades andinas. La estrategia para los países fuente está dirigida alrededor de políticas de interdicción, control y represión a las actividades ilegales. Sus metas son la erradicación, la desarticulación de los carteles y el control del lavado de dinero. El narcotráfico es visto como un tema de seguridad nacional y esto implica el desplazamiento de recursos militares y, además, la lógica de priorizar ese tema por sobre cualquier otro de las agendas multilaterales y bilaterales de los países andinos.

Democracia es, frente a la región andina, un problema de estabilidad con implicaciones para la seguridad. El caso venezolano es visto con sospecha ante la eventualidad de un gobierno hostil. Colombia se debate en Guerra Civil y los Estados Unidos han tomado partido en defensa del gobierno electo y, autónomamente, en contra de las organizaciones guerrilleras a las que acusan de narcotraficantes. La inestabilidad ecuatoriana ha sido dramática y en Perú han optado por dejar de tolerar a un gobierno autoritario. Preocupa la caída económica boliviana.

3 La agenda interamericana de los Estados Unidos se concreta en las cumbres presidenciales. Desde Miami hasta Québec estos temas han sido reiterativos.

4 Esta agenda se reitera en la última administración republicana: democracia, libre comercio y prosperidad. Ver: Bureau of Western Hemisphere Affairs Fact Sheet, March 2001, “Summit of the Americas: Advancing Our Common Agenda”

5 Ver por ejemplo David Sanger, 2001, “Bush Links Trade with Democracy at Québec Talks”, *New York Times*, Abril 22

6 En la década de los noventa se produjeron textos centrales para la comprensión del fenómeno del narcotráfico. En la medida en que la estrategia antidrogas persiste, los efectos y supuestos de esos materiales, en lo nuclear, siguen

El narcotráfico tiene, como punto en común, una misma agenda para la interlocución que no es otra que estadounidense, pero al igual que el tema de democracia ofrece escenarios diametralmente distintos⁶. Para Bolivia, un país productor de hoja de coca, el tema supone decisiones que interpe- lan la política social. Miles de personas trabajan en un cultivo que es legal y que, dado el valor agregado por la ilegalidad de sus derivados para el mercado del norte industrializado, no ha podido ser sustituido exitosamente⁷. Colombia, en donde se cultiva, refina y exporta, afronta problemas inmediatos derivados de la simbiosis entre múltiples actores violentos, entre ellos agencias estatales, y la economía política del narcotráfico. Ecuador es un centro de tránsito y una estación de lavado de dinero. Perú también tiene problemas de violencia relacionada al narcotráfico, es un país cultivador y exportador. Venezuela puede ser un importante centro de lavado de dinero.

La percepción de los estados andinos, especialmente la que se ha generado en Colombia, es que el narcotráfico no es un tema que pueda ser manejado desde la política exterior o desde la simple capacidad del Estado. Se trataría, más bien, de un problema global que requiere políticas igualmente globales. La aproximación realista que acompaña a las prácticas de la estrategia antidrogas del Departamento de Estado, focalizada en la interdicción y el control, en este sentido, no puede ser eficaz porque supone capacidades que los estados andinos particularmente no tienen. Más allá de eso, la salida que le queda a esta estrategia es militarizar la política antidrogas y esto supone efectos distorsionadores en los escenarios sociales y políticos andinos. Pero, también, no cuenta con la reducida capacidad de las entidades de control locales, la confusión de misiones de las diferentes entidades de seguridad y la exposición al riesgo de

siendo válidos. Ver: Bruce Bagley y William Walker eds., 1994, *Drug Trafficking in the Americas*. New Brunswick Transaction Publishers. Peter H. Smith De. *Drug Policy in the Americas* Boulder: Westview Press.

7 En ningún país de la región andina la coca ha podido ser sustituida por otro producto más rentable. En algún momento otros productos -como el achiote- tuvieron precios más altos, pero el mercado se satura y esos productos recuperan sus precios originales. No así la hoja de coca cuyo valor depende de un mercado ilegal de derivados.

corrupción y violencia de la institucionalidad entera de las naciones andinas. Esto se ha anotado muy tempranamente⁸. Una vez que el actor político más importante del escenario internacional originado alrededor del narcotráfico, los Estados Unidos, ha optado por convertir a un tema que podría ser de salud pública en un tópico de seguridad nacional, el problema, sin embargo, radica en la implementación de las políticas de cooperación. Esta percepción, es necesario señalar, ha terminado siendo compartida por los estados andinos. Complaciente, como la erradicación en Bolivia, o finalmente consensuales, como en el caso de Ecuador⁹, que ha cedido parte de su territorio para una base aérea y ha apoyado la política de Washington sin crítica mayor en los últimos diez años. Los gobiernos andinos han admitido que el cultivo, refinación y comercialización de psicotrópicos son una amenaza a su propia seguridad. Puesta en perspectiva, esta política, sin embargo, contiene una reacción frente a una amenaza mayor para la estabilidad gubernamental: la continuidad institucional y la presencia misma de esas naciones en su entorno internacional, particularmente en el conjunto de normas e instituciones que constituyen el sistema interamericano: la potencial hostilidad de los Estados Unidos.

La posibilidad de divergir con las políticas antidrogas estadounidenses, y sobre todo con su construcción del narcotráfico como un tema de seguridad nacional, es lejana. Los costos políticos y económicos que sufriría una nación andina al adoptar una política contrahegémica en este tema, serían mucho más altos que los hipotéticos beneficios en términos de estabilidad o control de la violencia interna. Para los países andinos, mantener una relación armónica con los Estados Unidos es más importante, en función de su seguridad nacional, que los propios efectos de la guerra de las drogas.

8 Ver, por ejemplo, Bruce Bagley, 1992, "Myths of Militarization: Enlisting Armed Forces in the War on Drugs", en Peter Smith, *Drug Policy in the Americas*, Boulder: Westview Press.

9 Adrián Bonilla, 1994, "National Security Decision-Making in Ecuador: The case of War on Drugs", Tesis doctoral defendida en la Universidad de Miami, Cap. IV.

Los problemas que el narcotráfico produce en cada sociedad son diferentes y eso vuelve difícil la elaboración de una política exterior común, más allá de la retórica de la colaboración. La forma en que el tema es procesado frente a los Estados Unidos es diferente en cada caso, de la misma manera que las políticas de los gobiernos frente a sus respectivas sociedades¹⁰.

Como resultado de un proceso político internacional, fuera del control de los estados de la región, y de la crisis política y económica de los últimos años, aparecen dos consecuencias centrales que identifican el escenario en donde operan las políticas exteriores andinas: vulnerabilidad y debilidad.

Las políticas de seguridad en la región andina, en una dinámica de complacencia con los Estados Unidos, separan en la agenda aquellos temas que se refieren a las drogas y a las conductas que todos los países andinos deben adoptar¹¹. Sobre la base de la asimetría en la relación, el sistema de preferencias arancelarias, las potenciales sanciones comerciales, las represalias directas sobre la elite local -anu-

lación de visas, por ejemplo-, han perfilado conductas cooperativas con la estrategia antidrogas de Estados Unidos, pero esta estrategia, que se inspira en una visión regional, solo puede ejecutarse a través de políticas de seguridad bilaterales.

10 En Andrés Franco, 1998, *Estados Unidos y los países andinos, 1993-1997: poder y desintegración*, Bogotá, Universidad Javeriana, se ofrecen -desde distintas perspectivas nacionales- ensayos de varios autores sobre las relaciones de los países andinos con los Estados Unidos. Probablemente es el texto más completo de los años noventa sobre el tema.

11 El concepto de complacencia (*compliance*) denota una relación dependiente en la política exterior de dos países, caracterizada por la asimetría entre los actores. Supone un sistema de castigos y recompensas que opera perfilando la conducta del actor más débil que encuentra conveniente allanarse a los intereses del otro.

Ver: Bruce Moon, 1983, "Consensus or Compliance? Foreign Policy Change and External Dependence", en: *International Organization*, Vol.39 Spring.

Jeanne Hey, 1992, "Foreign Policy Options under Dependence: A Theoretical Evaluation with Evidence from Ecuador", *Latin American Studies Quarterly*.

12 P.R. Rajeswari, 2000, "US. Counter-narcotics Policy", en *Strategic Analysis*, Vol. XXIII, No.11 p.5.

Esta agenda común, regional, que en realidad es una política global, tiene como propósito generar regímenes internacionales cooperativos para fortalecer la interdicción, destruir las organizaciones ilegales, arrestar a los narcotraficantes y controlar las ganancias ilícitas. Varias áreas de acción se derivan de esto: erradicación de cultivos, monitoreo de insumos y precursores para el procesamiento, mejora en la cooperación legal internacional -extradición, por ejemplo- y prevención del tráfico¹².

Los toscos procedimientos de rendición de cuentas, entre los cuales el más importante en términos políticos es el de la certificación, confrontan la agenda regional con la mecánica bilateral. Efectivamente, cada país es evaluado por separado alrededor del cumplimiento de tratados firmados igualmente por separado. De la misma manera compartimentada se encuentran elaborados los presupuestos de cooperación contra el narcotráfico, de lo que se desprende finalmente que la política se lleva por separado con cada país.

El bilateralismo, por otra parte, es una consecuencia inevitable de la *seguritización* de la agenda del narcotráfico, más aún cuando no hay ningún régimen de seguridad cooperativo en la región, nada parecido a un comando conjunto de ejércitos andinos. La aproximación bilateral implica que la agenda estadounidense, que ha militarizado la lucha contra el narcotráfico, se imponga inevitablemente sin que haya retroalimentación que la pueda modificar, a pesar de su evidente fracaso a lo largo de los últimos 20 años.

La militarización de la lucha antidrogas no sólo que ha disparado los escenarios menos amigables para los derechos humanos en la región andina en las últimas décadas, sino que ha erosionado los fundamentos mismos de la democracia como régimen político en la región, además de ser una amenaza a la seguridad regional de varios países latinoamericanos¹³. Pero sobre todo, no ha alcanzado ni uno solo de los objetivos estratégicos en términos de desarticulación del mercado de drogas ilegales. De hecho, mientras persista la aproximación de "seguridad", las probabilidades de éxito de esa estrategia son poco probables.

13 Glen Segell, 2000, "The Narcotics War and Civil-Military Relations", Ponencia presentada en la 41 Conferencia de ISA, p.14.

El conflicto violento en Colombia. Implicaciones para las sociedades vecinas

El conflicto colombiano enlaza precisamente la imagen de la región andina, construida en la formulación de la estrategia estadounidense, y sirve de catalizador de las distintas políticas exteriores de los países andinos. Especialmente para los países que limitan con Colombia, el enfrentamiento entre guerrilleros, paramilitares y tropas regulares tiene implicaciones directas en los procesos políticos domésticos. A diferencia de lo que ocurre con la política exterior estadounidense, para ecuatorianos, venezolanos y panameños, el narcotráfico es un telón de fondo de la violencia que amenaza a sus propios países, pero no es necesariamente el escenario principal ni el peligro a neutralizar en forma inmediata. El conflicto armado sí lo es, y sus implicaciones, hacen de él una dinámica vinculada pero distinta a la del narcotráfico.

La percepción de la amenaza que genera Colombia en la región andina proviene de una sociedad civil fragmentada y de un estado sin capacidad de control sobre los actores políticos ni de ocupación del territorio nacional. No se trata de la inseguridad generada por políticas agresivas o competitivas en un clásico escenario realista. La violencia colombiana es un conflicto de la post guerra fría que difícilmente admite la intermediación cooperativa para los países, porque envuelve una amenaza presente y activa de distinta naturaleza y fuente, dependiendo de la región y de los actores con los que se interrelaciona. Rebase la percepción de capacidad de los estados nacionales que les otorga la noción de actores preeminentes del sistema internacional e involucra a muy diversos actores políticos subnacionales de distintos países: campesinos, militares, policías, empresarios, poblaciones de frontera, gobiernos locales, organizaciones de derechos humanos, contrabandistas, narcotraficantes, cultivadores ilegales, proveedores y comerciantes, para citar varios ejemplos de intereses que no necesariamente operan a través de prácticas violentas pero que son interpe-ladas por ellas.

La estrategia del gobierno colombiano consiste precisamente en internacionalizar su conflicto y

en esto coincide con Washington. El Estado colombiano apuesta a convocar a la sociedad civil internacional y a los gobiernos aliados, bajo el principio de corresponsabilidad, porque ha visualizado sus propios límites institucionales y sus capacidades¹⁴.

La posición colombiana no es nueva. Al menos desde el gobierno del presidente Gaviria, ha insistido en que el narcotráfico es un problema internacional. Colombia no tiene la capacidad de resolver este problema. Su preocupación central, sin embargo, es la violencia ligada al narcotráfico en su propio país. La visión gubernamental colombiana del narcotráfico es la de una amenaza transnacional a la seguridad, una expresión del crimen organizado que trasciende fronteras¹⁵. En este sentido, su formulación del problema es coincidente con la que hacen los Estados Unidos. No es difícil entender la complementariedad de ambas políticas exteriores para procesar este tema.

Con el presidente Pastrana, el gobierno colombiano ha buscado internacionalizar el conflicto alrededor del respaldo de otros gobiernos para combatir dos fenómenos persistentes en la sociedad colombiana contemporánea: el narcotráfico y la guerrilla. El combate al narcotráfico es el cebo con el que Pastrana ha logrado no sólo respaldo militar estadounidense, sino también la aquiescencia ecuatoriana para desarrollar operaciones antiguerrilleras. El argumento colombiano es que sus capacidades no bastan para tratar con estos asuntos: "Colombia no puede sola. El reto al que nos enfrentamos como nación y como parte de la comunidad mundial es, quizás, el mayor desafío de nuestra historia (...) Colombia atraviesa hoy por su más difícil prueba y su futuro está en la cuerda floja por causa de la violencia y del narcotráfico. En Colombia vivimos un conflicto armado que nos desangra pero no una guerra civil(...) Pero, lo que es más grave, estos grupos subversivos

14 El Plan Colombia es un documento gubernamental colombiano en el que alrededor de diez puntos se desarrolla una estrategia de crecimiento y paz. Sus puntos más importantes son los que tienen que ver con erradicación de cultivos, plan de paz con la guerrilla.

15 Rafael Pardo Rueda, 1999, *Nueva seguridad para América Latina*, Bogotá: FESCOL(pp.51-55).

se financian en muy buena parte con dineros provenientes de los narcotraficantes”¹⁶.

Los Estados Unidos, por su parte, apoyaron al Plan Colombia con mil trescientos millones de dólares en una aproximación también regional. De hecho, el paquete de ayuda militar a Colombia se inscribe en la afirmación de que ni Colombia ni sus vecinos pueden cargar solos el peso de la lucha contra el narcotráfico y en esta premisa, la de la internacionalización, se asienta tanto la estrategia cuanto su encarnación: el Plan Colombia¹⁷.

La ayuda se destina a mejorar la capacidad de acción del gobierno, tema al que en el Congreso estadounidense se le añadió también el tópico de Derechos Humanos, para ello la ayuda es de USD 15 millones. El punto fuerte es el apoyo a la expansión de operaciones militares en el sur del país, en la frontera compartida por Colombia con Ecuador y Perú, sector donde se calculan están las más grandes plantaciones de cultivos ilegales, pero que además está controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Seiscientos millones de dólares fluirán durante los años 2000 y 2001 y servirán para dotar a las Fuerzas Armadas de 63 helicópteros de última generación, la flota más importante de estos aparatos en toda Sudamérica. De hecho, el balance de armas en la región queda alterado con este suministro. Trescientos cuarenta dólares adicionales se destinarán al control militar del tráfico aéreo, y cien millones irán a reforzar a la policía. Solo ciento cuarenta y cinco millones invertirán los estadounidenses en programas alternativos para sustituir cultivos y mitigar el impacto de la erradicación¹⁸.

La desproporción presupuestaria existente entre aquello que el gobierno estadounidense entrega para combate, interdicción y refuerzo policial, frente a la inversión social, fuerza a que el Plan Colombia, a pesar de haber sido propuesto como

una estrategia de desarrollo, termine convirtiéndose en los hechos un punto de acuerdo colombo-estadounidense para combatir narcotráfico -en la lógica de interdicción y presión sobre la oferta- y guerrilla.

Una estrategia que, por tres razones, también involucra en el conflicto a la comunidad interamericana: primero, es imposible asumir que una política estadounidense pueda aislarse del conjunto de la institucionalidad interamericana existente y que no admita respuestas, aunque sea *by default*, por parte del resto de países latinoamericanos. Una política de seguridad estadounidense implica una aproximación regional, dada la asimetría y el grado de influencia de la superpotencia en el hemisferio occidental. Segundo, la localización del conflicto militar se produce en un sector de la selva colombiana que limita con tres países: Ecuador, Perú y Brasil. Uno de ellos está directamente involucrado en el conflicto, Ecuador, al haber concedido una base aérea que respaldará las operaciones en Colombia, y los otros dos han militarizado sus fronteras. Tercero, el argumento de que el narcotráfico es un fenómeno transnacional tiene asidero, y puesto que la perspectiva estadounidense lo liga a la guerrilla, convierte a ésta, finalmente, no sólo en un agente doméstico colombiano sino en un actor internacional.

La posición estadounidense se basa en la creencia en que el conflicto colombiano afecta al orden internacional y particularmente a la seguridad regional. Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Panamá, México y el Caribe, son de alguna manera influenciados por las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Los objetivos estadounidenses en ese país sudamericano serían básicamente: aumentar la capacidad del gobierno para desarrollar actividades de inteligencia, erradicar las plantaciones ilegales, sostener la interdicción del los narcóticos y fortalecer las entidades colombianas de control y represión así como su sistema de justicia¹⁹.

Adicionalmente, el gobierno estadounidense parte de la suposición de que ni Colombia ni sus

16 Andrés Pastrana, 2000, “Colombia: Un desafío y una promesa”. Texto de la posición presidencial distribuido por las misiones diplomáticas, s.e., p.1.

17 Ver el discurso presidencial de Clinton: *Statement by the President*, January 11, 2000, The White House.

18 Ministerio de Relaciones Exteriores, 2000 “El Plan Colombia aprobado por el Senado de Estados Unidos, el viernes 23 de julio del 2000”. Documento distribuido por las misiones diplomáticas colombianas.

19 Gabriel Marcella y Donald Schulz, 1999, *Colombia's Three Wars: U.S. Strategy at the Crossroads*, Carlisle: US Army War College.(pp-19-29).

vecinos tienen la capacidad de afrontar solos el fardo de la lucha antidrogas. En otras palabras, la ayuda estadounidense está dirigida a suplir las deficiencias de Colombia y de los países vecinos. Al igual que en la visión de Pastrana, los Estados Unidos apuestan por la internacionalización²⁰.

La lógica implícita en la estrategia de Washington sería forzar a la guerrilla, especialmente a las FARC, a negociar desde una posición debilitada en el campo de batalla, pero esta idea de derrotar militarmente a la guerrilla termina implicando que la prioridad en estos momentos es la guerra contra la guerrilla y en segundo plano, como consecuencia de esto, la guerra a las drogas, lo cual representaría un viraje dramático en la aproximación convencional de los Estados Unidos²¹. Sin embargo, los países vecinos tienen una dimensión distinta desde sus propias necesidades. La aprobación del presupuesto militar para la erradicación de cultivos ilegales en Colombia, hecha por el Congreso estadounidense, plantea un escenario de guerra inminente en la frontera que va a tener consecuencias sobre tres vecinos. En otras palabras es una amenaza a la seguridad de los países andinos tanto por sus efectos directos cuanto porque los países andinos han tenido que admitir un rol tutelar de los Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico²². Esta situación ocurre en un contexto en que la región andina es extremadamente vulnerable, por su propia debilidad, a las presiones de su entorno internacional.

Los países vecinos enfrentarán un problema que puede implicar la presencia de cualquiera de los actores violentos colombianos en territorios ajenos²³, un desastre humanitario y conflicto social detonado por migraciones masivas, una catástrofe ecológica o la diseminación de cultivos ilegales.

La amenaza a la seguridad nacional, entendida ésta en términos convencionales como amenaza al Estado y sus instituciones, es clara e inminente.

20 Ver The White House: *Statement by the President*, January, 11, 2000.

21 Bruce Bagley, 2001, "El tráfico de drogas y la política de Estados Unidos en Colombia", en *Iconos*, No.10, FLACSO-Ecuador.

22 Francisco Leal Buitrago, 2001, "El Plan Colombia: Orígenes, desarrollos y proyección regional", en *Iconos*, No.10, FLACSO-Ecuador.

No se trata de un peligro a largo plazo, es la consecuencia del despliegue de cinco mil hombres del ejército y policía colombianos con tecnología de punta y armas de última generación en la frontera inmediata de Ecuador, Brasil y Perú. Enfrentarán a siete mil combatientes de las FARC. Hay en la región varios batallones de fuerzas paramilitares y un número indeterminado de bandas armadas que ocasionalmente cometen delitos.

Ecuador se encuentra particularmente inmerso en el problema. La Base de Manta involucra directamente al país en las operaciones militares en Colombia. Si bien no hay tropas ecuatorianas o estadounidenses en combate, la información, inteligencia aérea y respaldo logístico de la Base implica de hecho la participación estadounidense en el conflicto, aunque sin tropas, de la misma manera que la complacencia ecuatoriana y por lo tanto su corresponsabilidad en esta estrategia. El propósito declarado de la Base de Manta es el control de actividades anti-narcóticos. El acuerdo permite el acceso de aeronaves estadounidenses y el sobrevuelo a territorio ecuatoriano para detectar, monitorear rastrear y controlar las operaciones ilegales de narcóticos. Los aviones estadounidenses son naves con capacidad de monitorear más allá del territorio ecuatoriano, de hecho la base de Manta está en capacidad de suministrar información sobre las operaciones militares que se desarrollarían en el lado colombiano de la frontera suroriental con Ecuador, precisamente en el territorio en donde las operaciones de erradicación implican combates

La lógica implícita en la estrategia de Washington sería forzar a la guerrilla a negociar desde una posición debilitada en el campo de batalla, pero esta idea termina implicando que la prioridad en estos momentos es la guerra contra la guerrilla y en segundo plano, como consecuencia, la guerra antidrogas.

23 La incursión de actores violentos en el año dos mil a lo largo de la frontera con el Ecuador ha significado el secuestro de decenas de técnicos petroleros. Choques con militares brasileños se han producido también, y en Venezuela este fenómeno existe desde hace varios años.

con efectivos de las FARC²⁴.

La posición ecuatoriana contrasta con la de Venezuela que a lo largo del gobierno del Presidente Chávez ha tenido posiciones de disenso con el gobierno colombiano. Efectivamente, el reforzamiento lógico de la frontera como consecuencia del Plan Colombia, tiene como antecedente en Venezuela declaraciones del Presidente que enfatizaban la neutralidad de ese estado en el conflicto.

Estas primeras posiciones de Chávez fueron moderándose con el tiempo. La neutralidad hubiese significado el reconocimiento de una de las facciones guerrilleras como fuerza beligerante, sujeto de derecho internacional. Desde la perspectiva convencional de las Fuerzas Armadas venezolanas, eso habría implicado un reto adicional a la seguridad nacional, máxime cuando a lo largo de la segunda mitad de la década de los noventa, las fuerzas armadas venezolanas chocaron varias veces con efectivos del ELN, y hubo acusaciones de persecución en caliente a columnas guerrilleras en territorio venezolano.

El apoyo militar de Washington al ejército colombiano y su escepticismo respecto a las negociaciones con la guerrilla tiene la posibilidad de crear situaciones conflictivas en forma inmediata en todas las fronteras de Colombia. Desplazados, movilización y retirada de la guerrilla y de otras fuerzas, enfrentamientos, colapso económico de las regiones donde se siembra amapola y coca, implica para las naciones vecinas, teatros inmediatos e inevitables de conflicto. En una lógica de *self help*, que prevalece cuando la seguridad nacional está en riesgo, no es conveniente para países como Ecuador, Perú o Brasil, que la estrategia militar diseñada por Washington y el desarrollo de operaciones armadas este al borde de sus fronteras. En esos términos no hay razones para apoyar a los Estados Unidos que no sean las de la capacidad coercitiva que eventualmente puede asumir la política exterior estadounidense contra gobiernos disiden-

tes, o las que devienen del conflicto político doméstico²⁵.

La suposición de que los países andinos aliados puedan producir cierta posición contrahegemonía es ciertamente ingenua. Los países andinos tienen en su relación económica y política con los Estados Unidos, dinámicas competitivas y no complementarias. Compiten entre sí, siempre lo han hecho. No hay ningún proceso estructural que haga pensar que esta situación ha cambiado²⁶. De otro lado, una alianza andina sin Bogotá no es posible, y el gobierno colombiano es por el momento un socio mucho más cercano a Washington que a sus pares andinos.

En la lógica de estricta conveniencia de cada una de estas naciones, la política exterior estadounidense envuelve el riesgo de involucrar a estos países en el conflicto cuando su interés es aislarse. Un régimen de seguridad andino, cualquier régimen de seguridad en el hemisferio, sin la presencia estadounidense simplemente es impensable, de modo que las opciones se limitan a lo que cada uno de estos países por sí mismo pueda hacer para evitar contaminarse.

En la lógica convencional de la seguridad nacional, los intereses de los países limítrofes en relación al conflicto colombiano se concentran, en primer lugar, en la contención de la violencia dentro de las fronteras de Colombia y en la profilaxis respecto a cualquier posibilidad de contaminación sobre actores locales²⁷. Políticamente todos los países limítrofes han manifestado su respaldo al régimen establecido y la imagen de democracia en Colombia. Excepcional ha sido la postura venezolana que ocasionalmente ha mencionado la idea de "neutralidad" frente al conflicto que ha ocasionado la interpretación de cierto reconocimiento oficial a la guerrilla. Esta actitud no ha sido constante, pero ha lesionado la relación diplomática entre ambos países.

24 Ver Introducción y artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del texto del Acuerdo en Manuel Salgado, 2000, *¿Guerra sucia en Ecuador? Los documentos secretos de Manta*, Quito, Ediciones la Tierra.

25 En Venezuela, por ejemplo, la oposición a Chávez apoya al Plan Colombia, como parte de su agenda de confrontación con el caudillo tropical.

26 Ver por ejemplo, Socorro Ramírez, 2001, "Colombia, la crisis andina y la unidad sudamericana", en Luis A. Restrepo coord. *Síntesis 2001 Colombia*, Bogotá, Tercer Mundo IEPRI.

27 Entrevistas a oficiales venezolanos y ecuatorianos. Ver también Oswaldo Jarrín, 2001, "Seguridad en la frontera norte", en *Temas de Seguridad y Desarrollo. Edición especial*, Quito, IAEN.

Mientras que en Venezuela la guerrilla colombiana ha hecho incursiones constantes, en Ecuador y en Panamá estas han sido ocasionales, aunque suficientes para generar percepciones de riesgo y amenaza en los tomadores de decisiones sobre seguridad nacional. El ELN ha hecho incursiones y se le ha atribuido voladuras de oleoducto y dos secuestros masivos de técnicos petroleros en 1999 y en 2001. Más de una vez paramilitares colombianos en ese mismo país han sido mencionados como probables autores de crímenes comunes y políticos²⁸.

¿Una solución armada?

A inicios de siglo, la guerra en Colombia presenta escenarios distintos a los de los últimos treinta años. Los escenarios se diferencian por una mayor presencia estadounidense, el fortalecimiento logístico de las fuerzas guerrilleras, la negociación paralela de acuerdos de paz, la expansión de las fuerzas paramilitares y la potencialidad de internacionalización del conflicto. Estos elementos permiten comprender la posibilidad de elaborar escenarios que al menos hipotéticamente pasan por un triunfo militar de la guerrilla, la victoria armada del Estado, la prolongación indefinida de la guerra y una distribución negociada del poder²⁹.

Hasta 1999 la guerrilla colombiana, sobre todo las FARC, había alcanzado avances estratégicos, en términos militares, que le permitieron llevar la iniciativa de los combates y lograr una posición relativamente ventajosa para las negociaciones. Este hecho fue respondido desde el gobierno con varias opciones de paz que llegaron a su punto más alto con la concesión de la zona de despeje en San Vicente del Caguán, pero implicó, además un esfuerzo de guerra que alude a tecnología nueva, especialmente de vigilancia e información, en el escenario de los combates y que detona para

el año dos mil una ayuda record de la administración estadounidense al gobierno colombiano, invertida en entrenamiento y equipo militar que podrá usarse contra la guerrilla. El efímero desequilibrio estratégico de la guerrilla fue compensado en 1999 por el propio ejército colombiano que frustró varias ofensivas en distintas partes del país, y puede revertirse hacia políticas defensivas por parte de los insurgentes hacia el futuro³⁰.

La posibilidad de una victoria guerrillera a corto plazo en Colombia es más bien remota. A pesar de que la guerrilla ha estado en alza en los últimos años y de que ha crecido en términos militares, lo que se expresa en la construcción de una retaguardia segura, la formación de batallones experimentados en combate y con cierto nivel de profesionalización, y la capacidad de sitiar y eventualmente asaltar unidades militares y fortificaciones enemigas³¹, las fuerzas insurgentes no tienen legitimidad política en el seno de la población y no controlan, de hecho, ni la institucionalidad vigente, a la que no han podido sustituir sino en muy pocos casos con una institucionalidad alternativa, ni la economía formal, ni tampoco tienen en su poder las plazas militares más fuertes de Colombia.

El estado colombiano es extremadamente débil y vulnerable a la violencia interna y también a las políticas exteriores foráneas, pero no ha colapsado ni hay señales que indiquen su desaparición inminente. La iniciativa guerrillera en el terreno militar de los años 1996-1999 ha supuesto un cambio en la calidad del conflicto pero no ha revertido el hecho de que el gobierno constituido controla la economía formal, las relaciones exteriores, es legítimo alrededor de la idea de democracia frente a la guerrilla, está respaldado por unas fuerzas armadas y policía mucho mejor equipadas y más numerosas y ocupa muchísimo más espacio del territorio colombiano que las fuerzas insurgentes.

El gobierno colombiano tiene la capacidad en estos momentos, sobre todo por el mayor involu-

28 El asesinato del dirigente izquierdista Jaime Hurtado fue denunciado por el propio presidente de la República como ejecutado por sicarios vinculados a paramilitares colombianos. Las investigaciones posteriores demostrarían cierta vinculación de miembros de la policía en el caso.

29 Luis Alberto Restrepo, 1999, "La Guerra como oportunidad", en *Revista Foro*, No.36, Bogotá.

30 Ver Eduardo Pizarro León Gómez, 1999, *Nueva Sociedad*

31 Ricardo García Duarte, 1999, "Guerra con negociaciones y negociaciones sin paz", en *Revista Foro*, No. 36, Bogotá, p.17

cramiento de Washington, de retomar la iniciativa militar y de condicionar a futuro la suerte de las negociaciones. Esto no quiere decir que pueda a corto plazo ganar la guerra ni que sea capaz de solucionar el conflicto en términos militares. Se trata básicamente de que la guerrilla no tiene la capacidad de enfrentar una fase más intensa de la guerra ni cuenta con la posibilidad de extender sus capacidades fuentes externas de ayuda como las del gobierno colombiano con Washington, por ejemplo³². La guerra en Colombia, por otra parte, involucra a una compleja constelación de actores que interpelan una serie de intereses dispersos y fragmentados. De hecho, el propio gobierno colombiano no puede concebirse como un actor racional y unitario. Sus decisiones atraviesan a varios cuerpos de seguridad e interpelan a poderes locales y fuentes diversas de poder que operan sobre mandos que no están unificados y gozan de autonomía relativa³³.

Las FARC, que operan como el más activo y cohesionado grupo insurgente, están diseminadas a lo largo de Colombia y sus niveles de coordinación militar están supeditadas a una política común que deja bastante libertad a cada una de sus columnas en la interpretación. A estos hechos, comunes a todos los actores involucrados en la violencia, hay que añadir la presencia de otros actores esenciales como las otras fuerzas guerrilleras, de las cuales el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es el más importante³⁴.

A los actores señalados hay que agregar las fuerzas paramilitares que si bien nacen en la lógica de autodefensa, financiados por terratenientes y narcotraficantes, y con objetivos estratégicos no contradictorios con los de las Fuerzas Armadas, terminan en una dinámica expansiva y ofensiva y

ocupando dominios territoriales alrededor de funciones de protección, contención y exterminio de la guerrilla, expansión del latifundio, control de población y cuidado de actividades vinculadas al narcotráfico³⁵.

Los paramilitares, al igual que el ELN intentan generar espacios de negociación con el gobierno colombiano, y, aunque su dinámica militar es complementaria a la del ejército y la policía en relación al combate de la guerrilla, su involucramiento en los negocios ilícitos del narcotráfico es cada vez mayor. La percepción de una actitud tolerante (sino cómplice) por parte del ejército colombiano hacia los paramilitares es una imagen común en Colombia y compartida por la mayoría de reportes sobre derechos humanos, tanto gubernamentales como de organizaciones independientes³⁶.

Cualquiera de los escenarios de solución del conflicto colombiano pasa por la constatación de la existencia de la violencia paramilitar y de su relativa autonomía frente a los actores complementarios, en este caso, las Fuerzas Armadas. Incluso las especulaciones a propósito de la hipotética e improbable victoria militar del establecimiento gubernamental tienen implicaciones que no terminarían la violencia en el supuesto, por ejemplo, de la continuidad en prácticas delincuenciales de las organizaciones armadas o de integrantes de ellas³⁷.

La improbabilidad de una solución armada al conflicto con la victoria de cualquiera de las partes se explica en la incapacidad de construir escenarios definitivos, aunque todos los contendientes tienen la capacidad para golpear y dañar al enemigo. La erradicación de las guerrillas, o de los paramilitares, por ejemplo, de una parte del territorio no garantiza su desaparición, ni la capacidad de reubicación en un territorio que es, para comparar, sesenta veces más extenso que El Salvador, en donde no pudo haber victoria militar, y que cuen-

32 Luis Alberto Restrepo, op.cit., p.p.10.11

33 Ver en este punto los trabajos sobre narcotráfico a lo largo de los años noventa de Bruce Bagley y Juan Gabriel Tokatlian.

34 El ELN, a diferencia de las FARC, explícitamente ha evitado relacionarse con los narcotraficantes como política de la organización. Esto marca una distancia pero no garantiza la descontaminación de esta formación guerrillera, como de ningún otro actor de la participación política violenta en Colombia.

35 Iván Orozco, 1999, "La situación jurídico-política del paramilitarismo hoy", en *Revista Foro*, No.36. Bogotá

36 Ver *Newsweek*, 21 mayo 2001

37 La experiencia centroamericana, en donde las guerrillas y organizaciones paramilitares, menos numerosas que las colombianas, tenían una sociedad con menos espacio físico y menor complejidad, es que a pesar de acuerdos satisfactorios para todas las partes, la violencia ha continuado bajo formas delincuenciales.

ta con una población alzada en armas seis veces más numerosa que la que hubo en ese país, para no mencionar que además de la lógica militar, la violencia colombiana se explica en la heterogeneidad de su sociedad y la deslegitimación de un orden político excluyente³⁸.

La recomposición de la capacidad ofensiva de las Fuerzas Armadas colombianas probablemente tenga como efecto político central restituir la capacidad negociadora del gobierno y abrirle opciones en el terreno militar, pero no garantiza una victoria en la Guerra. El escenario más probable en el corto plazo parece ser el de la dilación del conflicto en una dinámica doble, signada por las negociaciones y la guerra en donde los hechos militares pesen sobre las conversaciones³⁹.

La débil presencia del estado Colombiano en sus fronteras *by default* pone en riesgo la región, pero el problema no puede resolverse, dada la multiplicidad de actores e intereses involucrados en todos los lados de la frontera colombiana, solamente con medios militares. La construcción de la institucionalidad estatal colombiana implica un proceso largo de consensos y aperturas en la sociedad, la economía y la política doméstica, en la cual los estados interlocutores tienen muy escasa influencia. Ciertamente es que la inestabilidad colombiana implica temas que van más allá de lo militar, pero es difícil suponer que la persuasión multilateral, entendida como cimiento de un paradigma nuevo de seguridad internacional⁴⁰, pueda dar cuenta de las aristas de este fenómeno.

Reflexión final

Con estos antecedentes, el entorno internacional de Colombia constituido por los países limítrofes y por los Estados Unidos, se enfrenta a un pro-

ceso conflictivo que involucra a varias sociedades regionales y a la política exterior de todos esos estados. El conflicto colombiano, sin embargo no es percibido uniformemente. Cada uno de ellos tiene una agenda propia y objetivos políticos distintos, mediados por la agenda bilateral y por la presencia y grado de influencia de la política exterior estadounidense. La seguridad nacional desde la perspectiva andina en un enfoque convencional difiere de los intereses de los Estados Unidos en tres puntos.

En primer lugar, la prevención de la infiltración guerrillera, paramilitar y de los otros actores violentos es prioritaria sobre el tema del narcotráfico, que es el objetivo final de los Estados Unidos. La hostilidad hacia la guerrilla no tiene por objetivo estratégico la lucha contra el tráfico de drogas sino la neutralización de este actor colombiano en los respectivos territorios nacionales⁴¹.

En segundo lugar, los intereses de seguridad y las percepciones de la amenaza son concebidas desde escenarios nacionales y no regionales y las políticas son diseñadas para responder a amenazas de corto plazo. Los problemas que plantea la posible acción de los actores violentos colombianos en territorios vecinos tienen que ver con ruptura de la institucionalidad, prácticas delictivas como secuestro, chantaje o extorsión, apoyo a la subversión local o generación de movimientos de este tipo. A los países vecinos interesa en primer lugar la ausencia de violencia en sus fronteras y luego la solución del conflicto.

Finalmente, los países vecinos no están interesados en ser parte del problema colombiano. No solamente que no tienen la capacidad de participar en él, sino que tampoco tienen la voluntad de involucrarse con uno de los actores, específicamente con el gobierno, más allá de las buenas intenciones. La política exterior de los países vecinos, incluyendo Venezuela, a pesar de la retórica de Chávez, tiene más bien una lógica aislacionista antes que intervencionista.

Lo anterior no significa que los países andinos tengan la capacidad de resistir a las presiones Estadounidenses. Es candorosa la suposición de que podrían aliarse para generar una alternativa. Even-

38 Alejo Vargas, 1999, "Colombia al final del siglo: entre la guerra y la paz", en: A. Vargas comp. *Guerra, Violencia y Terrorismo*, Universidad Nacional: Bogotá.

39 Ver, García Duarte, op.cit. Alejo Vargas, Op.cit.

40 Francisco Rojas Aravena, 1999, "Cooperación y seguridad en las Américas: Nuevos conceptos, nuevos riesgos, nuevas amenazas?", en F. Rojas de. *Cooperación y seguridad internacional en las Américas*, Caracas: Flacso-Chile, Nueva Sociedad, Wilson Center.

41 Ver Bagley 2001, op.cit.

tualmente van a verse forzados a participar al menos políticamente al lado de Washington, pero este escenario en lugar de resolver el conflicto lo puede diversificar.

La política estadounidense se encuentra con la de Bogotá en la necesidad de regionalizar el tema. La estrategia estadounidense, en ese sentido, apunta a la construcción de un régimen internacional de seguridad subordinado a sus objetivos de combate a la guerrilla y al narcotráfico. Ese proyecto, en la medida que prioriza la dimensión armada del conflicto, es un reto a la seguridad regional y a la de cada uno de los países andinos en particular, sobre todo porque en las actuales condiciones una victoria militar de cualquiera de las partes no parece probable.

Bibliografía citada

- Bagley, Bruce, 1992, "Myths of Militarization: Enlisting Armed Forces in the War on Drugs", en Peter Smith, ed., *Drug Policy in the Americas*, Westview Press, Boulder.
- Bagley, Bruce y William Walker eds., 1994, *Drug Trafficking in the Americas*. New Brunswick Transaction Publishers.
- Bagley, Bruce, 2001, "El tráfico de drogas y la política de Estados Unidos en Colombia", en *Iconos*, No.10, FLACSO-Ecuador.
- Bonilla, Adrián, 1994, "National Security Decision-Making in Ecuador: The case of War on Drugs", Tesis doctoral defendida en la Universidad de Miami, Cap. IV.
- Bureau of Western Hemisphere Affairs Fact Sheet, march 2001, "Summit of the Americas: Advancing Our Common Agenda".
- Franco, Andrés, 1998, *Estados Unidos y los países andinos, 1993-1997: poder y desintegración*, Universidad Javeriana, Bogotá.
- García Duarte, Ricardo, 1999, "Guerra con negociaciones y negociaciones sin paz", en: *Revista Foro*, No. 36, Bogotá.
- Hayes, Margaret D., marzo 2000, "La política de defensa en los Estados democráticos", Ponencia al seminario regional CHDS, Guatemala.
- Hey, Jeanne, 1992, "Foreign Policy Options under Dependence: A Theoretical Evaluation with Evidence from Ecuador", *Latin American Studies Quarterly*.
- Jarrín, Oswaldo, 2001, "Seguridad en la frontera norte", en *Temas de Seguridad y Desarrollo. Edición especial*, IAEN, Quito.
- Leal Buitrago, Francisco, 2001, "El Plan Colombia: orígenes, desarrollos y proyección regional", en *Iconos*, No.10, FLACSO-Ecuador.
- Marcella, Gabriel y Donald Schulz, 1999, *Colombia's Three Wars: U.S. Strategy at the Crossroads*, Carlisle, US. Army War College (pp-19-29).
- Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2000, "El Plan Colombia aprobado por el Senado de Estados Unidos", viernes 23 de julio de 2000.
- Moon, Bruce, 1983, "Consensus or Compliance? Foreign Policy Change and External Dependence", en *International Organization*, Vol. 9 Spring.
- Orozco, Iván, 1999, "La situación jurídico-política del paramilitarismo hoy", en *Revista Foro*, No.36. Bogotá.
- Pardo Rueda, Rafael, 1999, *Nueva Seguridad Para América Latina*, FESCOL, Bogotá.
- Pastrana, Andrés, 2000, "Colombia: Un desafío y una promesa", Bogotá.
- Rajeswari, P.R., 2000, "US. Counter-narcotics Policy", en *Strategic Analysis*, Vol. XXIII, No.11 p. 5.
- Ramírez, Socorro, 2001, "Colombia, la crisis andina y la unidad sudamericana", en Luis A. Restrepo coord. *Síntesis 2001 Colombia*, Tercer Mundo IEPRI, Bogotá.
- Restrepo, Luis Alberto, 1999, "La Guerra como oportunidad", en *Revista Foro*, No.36, Bogotá.
- Rojas Aravena, Francisco, 1999, "Cooperación y seguridad en las Américas: Nuevos conceptos, nuevos riesgos, nuevas amenazas?", en F. Rojas, ed., *Cooperación y seguridad internacional en las Américas*, Flacso-Chile, Nueva Sociedad, Wilson Center, Caracas.
- Salgado, Manuel, 2000, *¿Guerra sucia en Ecuador? Los documentos secretos de Manta*, Ediciones la Tierra, Quito.
- Sanger, David, 2001, "Bush Links Trade with Democracy at Québec Talks", *New York Times*, abril 22.
- Segell, Glen, 2000, "The Narcotics War and Civil-Military Relations", Ponencia presentada en la 41 Conferencia de ISA, p.14.
- Tulchin, Joseph y Ralph Espach, 2001, "A Call for Strategic Thinking", en Tulchin y Espach, eds., *Latin America in the New International System*, Lynne Rienne Publishers, Boulder.
- The White House: "Statement by the President", January, 11, 2000.
- Vargas, Alejo, 1999, "Colombia al final del siglo: entre la guerra y la paz", en A. Vargas, compilador, *Guerra, Violencia y Terrorismo*, Universidad Nacional, Bogotá.